

Los nuevos modelos de intervención sobre la sociedad rural: de la sostenibilidad al capital social

Luciano Martínez Valle
lmartinez@flacso.org.ec

Publicado en, Víctor Bretón y Francisco García (eds), Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina. Ecuador en Crisis, Icaria, Barcelona, 2003.

1. Introducción.

Actualmente, en América Latina se ha desarrollado una importante discusión sobre las nuevas formas de ver y analizar la sociedad rural y que indudablemente buscan la elaboración de nuevos modelos de intervención tendientes a la eliminación de la pobreza rural, dentro del contexto de una sociedad dónde se ha retirado paulatinamente el Estado del escenario rural y el mercado es considerado como el eje de la vida económica, social y política de los productores rurales. Claro está que esta preocupación no cuestiona para nada el actual modelo económico neoliberal, sino que al contrario se busca, dentro de la economía del ajuste, los resquicios institucionales que pudieran de alguna forma aliviar las condiciones económico-sociales cada vez más deterioradas en que sobrevive la mayoría de la población rural.

Hace rato que se abandonó la idea de los cambios o reformas estructurales (como la reforma agraria) y frente a los evidentes fracasos en la aplicación de la receta económica neoliberal, se busca elaborar algunas teorías que sin cuestionar para nada el statu-quo, pudieran desde lo social realizar el milagro que no se pudo desde lo económico. Así, sorprendentemente, tanto en el ámbito académico como en los organismos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, BID, CEPAL, FAO, etc) se ha desarrollado un verdadero “boom” de publicaciones sobre temas como el capital social, capital humano, participación, empoderamiento, que pueden conducir a una banalización de los conceptos y categorías de las ciencias sociales en el afán de hacerlos útiles para las propuestas de salvamento de los pobres rurales. La sociología considerada durante mucho tiempo por estos mismos organismos como la “convidada de piedra” de las ciencias sociales aplicadas al desarrollo se ha convertido en la “cenicienta” de la tecnoburocracia internacional, interesada en plantear las nuevas opciones o caminos para los sectores menos desfavorecidos del campo¹. ¿Hasta qué punto se está tergiversando el verdadero sentido de las luchas de los pobres frente a un modelo económico que simplemente los ha marginalizado en todas las dimensiones posibles? Ahora se habla de que los pobres no serían tan pobres porque dispondrían de un “capital social” (aunque todavía no hay acuerdo sobre el significado de este ambiguo término) y lo que se trataría es, entonces, de potenciar este capital para salir de la pobreza. Todavía no se vislumbran propuestas claras y viables de cómo utilizar el capital social para salir de la pobreza, porque simplemente este planteamiento se torna utópico si no se considera la necesidad de dotar de recursos económicos (dentro de la nueva jerga: capital físico o natural) para los pobres rurales.

Mientras tanto, otro tipo de políticas como los Proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI) que se habían venido implementado en la región poco a poco perdían piso, debido en gran parte al poco impacto en la solución de los problemas centrales de los productores rurales y también al desmantelamiento de las políticas del Estado en el sector agropecuario y rural. Para el caso ecuatoriano en el que centraremos nuestro análisis, el desarrollo rural en tanto política privilegiada hacia los productores campesinos predominó la escena rural durante las dos últimas décadas del siglo pasado. Este tipo de política demostró que no era sostenible y no era la solución para los problemas básicos de los campesinos; a lo más se transformó en una política ineficiente de asistencia social dentro del ya conocido “trickle down” que acompaña las políticas de ajuste. La pobreza rural pasó de 80 % en 1995 al 88 % en 1999, indicador que muestra que nueve de cada 10 habitantes rurales pueden ser catalogados como pobres (SAPRI, 2001). Así pues, luego de una década de aplicación de programas de desarrollo rural, su incidencia en la disminución de la pobreza fue nula.

¹ Véase, por ejemplo, la abundante producción intelectual sobre el tema por parte del Banco Mundial (2000)

A pesar de ello, en países como el Ecuador se insiste todavía en continuar con nuevos proyectos de desarrollo rural, y aunque ahora se denominen “sostenibles, descentralizados, con énfasis en el capital social y humano, tampoco están claramente enfocados hacia la solución de la pobreza rural².

En este trabajo, se parte de un análisis crítico de la concepción y praxis del desarrollo rural. Para ello se utilizará la última evaluación del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) implementado en el país durante la década del 90. Nuestra hipótesis de trabajo es que este tipo de políticas terminan beneficiando a capas de campesinos más acomodados y no justamente a los más pobres. En una segunda parte se discute el contenido de algunos de los nuevos paradigmas en boga sobre la sociedad rural, especialmente el capital social, dado que tanto desde el punto de vista académico como desde el institucional se ha convertido en cierto sentido en el instrumento “à la mode” para la solución de los problemas de los pobres rurales. Utilizaremos aquí algunos ejemplos de estudios recientes que muestran una vez más las limitaciones y potencialidades de procesos que tienden a ser elevados a categorías centrales explicativas de nuevos paradigmas que finalmente eluden cuestionar la conformación de una sociedad concentradora de la riqueza y marginalizante de amplios sectores sociales en los aspectos sociales y culturales.

2. El desarrollo rural en cuestión.

El desarrollo rural en el país tiene más de tres décadas de experiencias y pocos resultados visibles. En efecto, si tomamos como indicador central la disminución de la pobreza, tal como se plantea en casi todos los objetivos de los proyectos, se constata que ésta ha continuado creciendo, lo que es un indicador de la poca efectividad de las intervenciones públicas y privadas en desarrollo rural³. La hipótesis que desarrollamos en este trabajo es que el desarrollo rural, tal como se ha venido implementando es una política que ha topado techo y que no es más útil para cambiar las condiciones de la población rural más pobre.

Las principales críticas a los proyectos de desarrollo rural tradicional impulsados tanto desde el Estado como desde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido principalmente tres: se trata de enfoques sectorialistas, proyectistas y productivistas. No se considera que la realidad rural es más compleja y dinámica de lo que frecuentemente se admite, así, no existen únicamente actividades agropecuarias sino también otras como el comercio, servicios, artesanía, construcción, etc., que responden a los niveles de vinculación mercantil y de articulación regional de las zonas campesinas. De allí que los enfoques sectorialistas (agropecuarios), son inoperantes especialmente cuando se aplican en zonas de campesinos pobres o con pocos recursos. Los enfoques proyectistas, buscan a toda costa cumplir con las metas diseñadas o programadas y no se ajustan a los ritmos y procesos reales existentes en la sociedad rural. Las prioridades están dadas desde el escritorio y en la mayoría de los casos no responden a las necesidades de los productores rurales sino a las modas en boga del qué hacer en materia de desarrollo rural. Finalmente, los productivistas, se centran en los resultados económicos por sobre cualquier otra dimensión y para ello no importan los medios a utilizarse ni la efectividad de los mismos. Esta es, por ejemplo, la medida con que se trabaja en la “transferencia de tecnología”: un limitado número de ensayos, unas cuántas giras de observación, para finalmente demostrar que se cumplió con el objetivo de un componente productivo del proyecto.

Estos enfoques dejan de lado el problema de la sostenibilidad que tal como se la acepta actualmente, no incluye solo la dimensión ambiental, sino también la económica y la social (Martínez Valle, 1997). A pesar de que se han realizado algunos intentos de trabajar en la dimensión ambiental y económica, muy poco

² Así por ejemplo, se ha diseñado una tercera generación de proyectos denominada PROLOCAL que recoge las preocupaciones y debates sobre la descentralización, capital social, capital humano y financiero, pero que no están directamente involucrados en la solución de los problemas de los más pobres.

³ Esta constatación no es nueva, pues el mismo Banco Mundial ha llegado a reconocer que el 45 % de sus 82 proyectos impulsados entre 1975 y 1982, “era insatisfactorio en cuanto a la reducción de la pobreza” (Rich, 1994:97), citado por McMichael (1998: 12).

se ha hecho en la social, no obstante existir buenas condiciones para ello, dado el incremento del nivel organizativo formal en el ámbito rural sobre todo de la sierra. El desarrollo rural debería ser sostenible en el sentido más apegado a la palabra, es decir que cuando se termine el financiamiento de un proyecto, las acciones más importantes puedan seguir implementándose sobre la base de la misma dinámica de los productores rurales y de sus organizaciones. Yo no encuentro muchos ejemplos de proyectos sostenibles en el caso ecuatoriano⁴.

Aunque no se ha logrado procesar toda la rica experiencia en desarrollo rural que existe en el país, es evidente que donde más se han concentrado las acciones de desarrollo rural estatal y privado, sorprendentemente, más se ha acentuado la pobreza entre la población campesina. El caso paradigmático es sin duda Chimborazo, zona tradicional de intervención de la Reforma Agraria y de la Misión Andina en los años 60, el Desarrollo Rural Integral (DRI) en los años 70, el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) y por supuesto de un gran número de ONG durante los 90. Según estudios recientes, el 33 % de las ONG existentes en el ámbito nacional se concentran en esta provincia y dentro de ella, el 20 % se ubican en el cantón Riobamba. A pesar de ello, Chimborazo exhibe los índices más altos de pobreza (Bretón, 2001). El desarrollo rural implementado con los paradigmas anteriormente señalados al parecer ya no es más aplicable en el país.

Contrasta esta situación con áreas de la misma sierra ecuatoriana en donde la intervención del Estado y de ONG ha sido limitada (caso de la Provincia de Tungurahua), pero en cambio, gracias a condiciones históricas específicas como la ausencia del latifundio, la conformación de una estructura agraria minifundista y la existencia de un mercado dinámico para productos agropecuarios, los productores rurales lograron implementar estrategias económico-productivas muy diversificadas en base a la combinación fruticultura – trabajo de confección de prendas de vestir (Martínez Valle, 1994). La ventaja de este modelo es que es sostenible no tanto por la intervención externa en materia de desarrollo rural sino por la creatividad e iniciativa de los mismos productores rurales. El desarrollo rural en este caso, necesitaría únicamente de políticas macroeconómicas complementarias a partir de una acumulación realizada por los mismos productores rurales (North, 2000). Este camino en el cual no ha existido mucha inversión externa, pero si una valiosa acumulación de experiencias de los productores rurales no ha sido visualizado como un proceso alternativo para repensar el desarrollo rural. Pero ahí está el modelo y el desafío hacia el futuro.

No obstante, el tema del desarrollo rural empieza a ser discutido bajo otra perspectiva que la predominaba en las dos últimas décadas. Esta es una preocupación que se manifiesta también en los países europeos. Así por ejemplo Etxezarreta, plantea que “las estrategias más adecuadas para generar el desarrollo rural integral giran en torno a las ideas de *diversificar* y *aglutinar*” (1997:138). Esto es, que la población rural pueda desarrollar la pluriactividad y al mismo tiempo utilizar los variados recursos familiares para mejorar los niveles de ingreso. Según esta autora: “...se considera positiva la combinación de diferentes actividades con requerimientos de tiempo parciales que, conjuntamente, proporcionan trabajo e ingresos a la familia. Se practica la pluriactividad: conjunto de actividades remuneradas, agrícolas y no agrícolas, ejercidas por una unidad social o económica (Ibid: 139). Estas dos ideas son interesantes, pues la diversificación dependerá de la dinámica económica regional, mientras que aglutinar significa entre otras cosas tensionar y aprovechar mejor los recursos internos de las familias campesinas. Esto es justamente lo que hacen los productores rurales de Tungurahua y no les va mal. Moyano, igualmente señala que: “...la visión agrarista del desarrollo, que identificaba desarrollo rural con desarrollo agrícola, ha sido sustituida en los nuevos planes por una concepción más integral en la que se plantean estrategias capaces de dinamizar todos los recursos endógenos, agrícolas y no agrícolas, existentes en las comunidades rurales” (2000: 64). Mientras que Link resalta las nuevas funciones de los espacios

⁴ En el caso ecuatoriano se plantea como paradigmática la experiencia de Salinas en la provincia de Bolívar, pero que yo sepa no camina solo. Allí está presente desde hace 25 años el FEPP, una ONG vinculada a la Iglesia Católica y no hay indicios de que en el plazo corto pueda cambiar esta situación. Mucho más interesante en todo caso es la experiencia de aprendizaje que realiza actualmente la Organización de Segundo Grado (OSG) TUCAYTA en la provincia de Cañar, pues es el único caso en el Ecuador dónde un proyecto de riego ha sido transferido completamente a una organización indígena de segundo grado.

rurales: "funciones residenciales, muy estrechamente relacionadas con el uso de medios de transporte individual, funciones recreativas, funciones de preservación y valoración de los patrimonios paisajísticos, ambientales y culturales (2001:2). Es decir, una complejización del territorio rural como efecto de la pérdida de la centralidad de la agricultura en la conformación de los espacios rurales y la presencia de nuevas actividades productivas muy diversificadas.

También en el caso ecuatoriano, los cambios que se han registrado en el sector rural como producto de la implementación de las políticas de ajuste dentro del marco neoliberal de la economía, han puesto sobre el tapete de discusión nuevos procesos que se engendran en el medio rural y nuevos problemas a resolverse.

Entre los primeros se encuentra un evidente cambio en la prioridad asignada por la misma población rural a las actividades agropecuarias. Sin duda esto es el resultado del avance de procesos de concentración de tierras ya señalados por el Banco Mundial en 1995 a través de los estudios de las Encuestas de Condiciones de Vida (EVC)⁵ y de la aguda situación de minifundismo entre la población campesina más pobre. Sin recursos, es decir, sin tierra, simplemente no hay como dedicarse a tiempo completo a la agricultura y el incremento de las actividades no agropecuarias también señalado por las estadísticas es una realidad que asusta a quienes están acostumbrados a mirar el campo con un lente agrarista.

Entre los nuevos problemas a resolverse, ya no cuenta solo la agudización de la pobreza y su crecimiento correlativo a la intervención pública y privada en el medio rural, sino que hay nuevos desafíos que provienen tanto de los cambios demográficos, socio-económicos y políticos experimentados por las comunidades y familias campesinas así como de los procesos de integración regional y mundial a los que se ve abocada la economía campesina. Hay sin duda una nueva forma de relacionarse de la sociedad rural con el contexto regional, nacional y mundial que todavía no ha sido estudiada.

3. Las lecciones de los procesos de desarrollo rural recientes⁶.

Los programas implementados durante las dos últimas décadas han encontrado un obstáculo mayor en la falta de un marco de política económica favorable a los pequeños productores rurales. Al contrario, el impacto de las políticas de ajuste, el desmantelamiento progresivo de las instituciones estatales, la flexibilización laboral y el apoyo hacia las políticas aperturistas han pesado sobre las posibilidades de consolidación de la economía campesina. De esta forma, un programa de desarrollo rural diseñado para una reactivación productiva de campesinos mayormente productores para el mercado interno, necesitaban de un marco favorable de política económica que como lo señala Echeverría : "permitiera por un lado, la rentabilidad de la producción agropecuaria y que favoreciera el acceso de pequeños productores con potencial agrícola a los recursos productivos y, por otro, el fomento de actividades rurales no-agrícolas" (2000:4). En el caso ecuatoriano no existió ni lo uno ni lo otro, el desarrollo rural finalmente se lo ubicó en el contexto de políticas compensatorias para mitigar la pobreza, mientras el Estado se fue progresivamente desvinculando de los apoyos estratégicos en crédito, comercialización y tecnología⁷.

El PRONADER fue el último de los grandes proyectos agraristas, de diseño único de componentes para una heterogénea realidad local y dónde ni siquiera se aprovecharon los estudios realizados sobre el mismo programa⁸. Este proyecto empezó a ser aplicado en 1990 y terminó oficialmente en el 2000.

⁵ El índice de Gini, calculado para 1994, llegaba al 0.80 uno de los más altos de América Latina. Banco Mundial, 1995.

⁶ En este acápite se analizarán las tendencias que se desprenden de una evaluación del Programa realizada entre abril-junio del 2000. Se aplicó una encuesta de hogares a 1545 familias, se investigaron también a 180 organizaciones y se entrevistaron a 36 instituciones que colaboraron con el PRONADER.

⁷ No es una casualidad que en el Ecuador, la Subsecretaría de Desarrollo Rural se encuentre ubicada en el Ministerio de Bienestar Social.

⁸ Así por ejemplo no se tomó en cuenta el estudio de base realizado en 1993 sobre las 12 áreas del PRONADER, que señalaban las tendencias y problemas centrales de las unidades productivas.

Estuvo diseñado para beneficiar a 23.000 familias ubicadas en 12 áreas rurales⁹ con un costo total de 112 millones de dólares, de los cuales 84 millones fueron otorgados como préstamo por el Banco Mundial.

Los impactos del PRONADER en la población beneficiaria fueron muy débiles: en promedio el ingreso per cápita disminuyó de 354 US \$ en 1993 a 337 US \$ en el 2000 y únicamente en 5 áreas se registraron ligeros aumentos. Vale la pena mencionar a las áreas arroceras de Daule, Tres Postes y Playas de Higuera, ubicadas en la Cuenca Baja del Guayas, lo que confirma la hipótesis de que se trataba de un programa no diseñado para los más pobres, sino más bien para campesinos con buenas tierras, cultivos mercantiles y experiencia en adopción de tecnologías. En cambio, las áreas de la sierra con población indígena, donde se ubica la población más pobre (Sierra Norte, Guano y TTP) empeoraron su situación económica¹⁰. Se puede plantear la hipótesis de que las acciones de desarrollo rural tienen un mayor impacto en áreas donde previamente se realizó alguna intervención de reforma agraria, puesto que las áreas arroceras justamente fueron beneficiarias de la aplicación de la Ley de abolición del precarismo en 1970. En cambio en las otras áreas donde no hubo mayor intervención en materia de reforma agraria, el impacto fue menor. La hipótesis alternativa es que proyectos agraristas tienen dificultades en mejorar el ingreso en áreas donde las actividades económicas ya eran bastante diversificadas, este es el caso de las áreas más pobres ubicadas en la sierra y de las áreas ubicadas en las estribaciones de la cordillera occidental, donde inclusive existían procesos de encadenamiento de la producción agrícola¹¹.

Respecto al empleo, se constata una disminución del número de ocupados (de 87.1% a 76.4%) y un incremento de la población inactiva (de 12.9 % a 23.6%), lo que significa que la economía campesina no ha logrado conservar los mismos niveles de ocupación en el período analizado. El énfasis puesto por el proyecto en los componentes productivos agropecuarios, donde se concentró la asistencia técnica, más la crisis de ciertas actividades urbanas como la construcción y servicios fueron elementos que seguramente llevaron a muchos hogares campesinos a canalizar su mano de obra hacia las actividades agrícolas y pecuarias. No de otra manera se puede explicar el crecimiento de la ocupación en ellas y la disminución en actividades no-agropecuarias¹². No obstante una mayor diversificación ocupacional se da en las áreas de la sierra con menor acceso a la tierra, mientras en las áreas de la costa con mejores recursos y una agricultura mercantil más avanzada, la diversificación ocupacional es mínima. Ahora bien, no siempre la concentración de mano de obra en pequeñas parcelas campesinas es un sinónimo de sostenibilidad sobre la base de la actividad agropecuaria. Lo más probable es que la parcela campesina se convierta en un lugar de refugio de una mano de obra que no logra insertarse en otras actividades modernas, dada la crisis por las que atraviesan. En este sentido, la presencia de una abundante mano de obra familiar (47.5%), más los trabajadores por cuenta propia (31.8%) indica claramente una situación de subempleo presente en las parcelas campesinas en su gran mayoría menores a las 5 hectáreas (63.3% del total). Por último el proceso de proletarianización permaneció estancado en el período analizado, lo que demuestra que con pocas excepciones la agricultura empresarial tampoco demandó este tipo de trabajadores¹³.

En cuanto al acceso a la tierra, hay que señalar que a nivel del país, los datos de las encuestas de condiciones de vida (EVC) mostraban que para 1998, el 77.6% de las fincas menores a las 5 hectáreas

⁹ Las áreas de intervención fueron las siguientes: Espejo-Mira, Sierra Norte de Pichincha, TTP, Guano, en la sierra; Pangua, Facundo Vela y Santa Isabel en la zona de estribaciones de la cordillera occidental; Daule, Tres Postes y Playas de Higuera en la costa húmeda y Jipijapa y Paján en la costa seca.

¹⁰ En efecto, el ingreso "per cápita", descendió en Sierra Norte de US \$ 203 a 195, en Guano de US \$ 360 a 263 y en TTP de US \$ 277 a 202 entre 1993 y el 2000.

¹¹ Este es el caso de Pangua, Facundo Vela y Santa Isabel con la producción de caña de azúcar y el procesamiento de la panela y el aguardiente.

¹² La actividad agrícola que en 1993 ocupaba al 53.6% de población económicamente activa, en el 2000 ocupaba al 58.8 %. La ganadería que en 1993, ocupaba al 10 %, en el 2000 ocupaba al 14.5 %. En cambio, las actividades no-agropecuarias pasaron del 19.5 % en 1993 al 14.7 % en el 2000.

¹³ La excepción está dada por las empresas floricultoras de la sierra que demandan entre 11 a 13 trabajadores por hectárea, superior a la demanda de otros cultivos de esta región. La mayor parte de estos trabajadores provienen de comunidades indígenas cercanas, lo que ha generado un proceso importante de proletarianización entre esta población. (Mena, 1999).

controlaban solo el 5.3 % de la superficie, mientras en el otro extremo, el 1.5 % de las fincas de más de 100 hectáreas concentraban el 50.5% de la superficie total (Martínez Valle, 2000). En las áreas PRONADER también se cumple este proceso pues los campesinos no lograron siquiera conservar la misma superficie de sus propiedades. En efecto, los campesinos con fincas menores a las 15 hectáreas vieron disminuir el tamaño promedio entre 1993 y el 2000¹⁴, como resultado de las presiones internas de la unidad doméstica (factor herencia), así como de las dificultades de acceder a la tierra por la vía del mercado y la venta a grandes empresas. A partir de las 20 hectáreas en cambio, las fincas lograron incrementar el tamaño promedio de 31.1 a 39.8 has. Si algún impacto tuvo la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994 fue justamente facilitar el desarrollo de importantes procesos de concentración de tierras en beneficio de los grandes propietarios. Si bien se avanzó en los programas de titulación de tierras entre los estratos de 1 a 10 hectáreas¹⁵, esto no implicó un mejoramiento en el acceso a la tierra por parte de las unidades campesinas más pobres, como lo plantean los defensores de las virtudes del mercado de tierras (Banco Mundial, 1995, Echeverría, 2000, Vogelgesang, 2000, Jaramillo, 2000). En efecto, es muy difícil que campesinos pobres puedan acceder a las tierras que supuestamente entrarían a la oferta en el mercado; lo que sucede más bien es que son las tierras de los campesinos las que entran a ofertarse forzosamente en el mercado, con lo cual se agudizan los procesos ya mencionados de concentración de este recurso.

Tampoco hubo impactos positivos en el acceso de los campesinos a la tecnología, los activos financieros y al mercado. Si la mayoría de las familias del PRONADER se encontraban dedicadas a actividades agropecuarias, el acceso a estos activos se convertían en elementos claves para el mejoramiento de sus niveles de producción y productividad. Lo paradójico es que por ejemplo, había disminuido el porcentaje de familias que al inicio del programa tenían asistencia técnica (de 62.8% a 14.4 %). Esto indica un retroceso general en la adopción de tecnología por parte de las familias campesinas, situación agravada por el retiro progresivo de instituciones del Estado que de una u otra forma brindaban algún nivel de asistencia técnica (Ministerio de Agricultura, INIAP¹⁶) y a la debilidad de la asistencia técnica de origen privado. No obstante los campesinos buscaron reemplazar este vacío a través de los mecanismos del mercado, esto es, acudiendo principalmente a los almacenes agropecuarios ubicados en las ciudades más próximas quienes son los que en realidad recomiendan el uso de semillas, abonos, fertilizantes y pesticidas.

En general, entre los campesinos el acceso a los activos financieros es limitado, no solo por las dificultades de acceso al crédito formal, sino también por los altos costos de transacción y el tiempo empleado en obtenerlo. Como lo señala Yunus (2000), el crédito formal está basado en la desconfianza que se trata de evitarla a través de unos requisitos y garantías que no pueden ser cumplidos por los campesinos más pobres. No es de extrañarse que muy pocas familias del medio rural sean beneficiarias del crédito. Así por ejemplo, si en 1993 el 32 % de las familias recibió crédito, en el 2000 solo un 19.5 % logró acceder a este recurso. Entre las causas que explicarían esta sensible disminución del crédito, se puede mencionar: la crisis financiera nacional que se agudizó ya en 1999 con la quiebra de bancos e instituciones financieras y sobre todo la reorientación del Banco Nacional de Fomento (BNF), convertido en un banco comercial más, sin preferencias hacia los productores campesinos. Así por ejemplo, hasta 1993, las familias que tuvieron acceso al crédito, en un 41.4 % lo hicieron a través del BNF, mientras que en el 2000, este porcentaje bajó al 9.3 %. El vacío dejado por el BNF ha sido reemplazado por nuevos agentes financieros como las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las ONG y las Iglesias. Mientras tanto, el crédito informal concedido por prestamistas, acopiadores y familiares se ha reactivado, especialmente este último que permite eludir las altas tasas de interés del crédito agiotista a través de la reactivación de las redes de parentesco. Pero en general, frente a la crisis financiera (1999-2000), los campesinos han optado por no endeudarse, una estrategia prudente para conservar sus activos en tierra, aunque esto tenga incidencias negativas en los niveles de producción y productividad de los cultivos mercantiles.

¹⁴ Así por ejemplo, las fincas de menos de 1 hectárea pasaron de 0.75 a 0.43 has; las comprendidas entre 1 y 2 hectáreas de 1.6 a 1.25 has; las de 5 a 10 hectáreas de 7.2 a 6.6 has y las de 10 a 15 hectáreas de 12.4 a 11.8 has.

¹⁵ En efecto, hacia el 2000 todavía un 20 % de fincas no disponían de título de propiedad, porcentaje menor al 34.1% de fincas sin título hacia 1993.

¹⁶ Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Las economías campesinas en el caso ecuatoriano han estado vinculadas estrechamente al mercado, lo que se refleja en el importante porcentaje de la producción agrícola destinada a la venta (84%) antes que al autoconsumo (15%). Es interesante además constatar que un 30 % de la producción destinada a la venta era procesada en forma artesanal en los hogares campesinos. Este dato muestra la potencialidad de los encadenamientos hacia adelante de la producción agrícola, asunto que no es novedoso y que ya estaba presente desde los años 90 sobre todo en las zonas productoras de caña de azúcar (Pangua, Facundo Vela y Santa Isabel). Se trata de “clusters de sobrevivencia” conformados por empresas artesanales- familiares de baja tecnología y productividad que producen productos de baja calidad para el mercado local (Dirven, 2001). En las áreas PRONADER, al menos existían dos tipos de clusters de esta naturaleza: el cluster lechero y el de la caña de azúcar. Lamentablemente fueron marginalizados en el diseño del Programa a pesar de su importancia en la generación de empleo e ingresos entre los productores rurales¹⁷. Una vez más se constata las limitaciones de una visión agrarista que impedía visualizar estos procesos y desarrollarlos en la medida en que ya existían entre los campesinos. Así pues, un programa de desarrollo rural sin asistencia técnica, sin crédito y sin estrategias viables de mercado poco impacto podía tener en el aspecto productivo.

No fue sino hacia el final del programa, que se trató de impulsar las denominadas “micro empresas rurales” que ya habían fracasado bajo la modalidad de FODECOS (Fondos de Desarrollo Comunitario) debido a la falta de encadenamientos con la producción local y su poca viabilidad gerencial (débil capital humano). En gran parte esta iniciativa micro empresarial venía de fuera y no era el resultado de la dinámica local.. Una vez terminado el proyecto, las micro empresas de carácter muy postizo que se formaron deben estar moribundas, si es que no han quebrado totalmente. Lo más sorprendente de todo es que nunca fueron consideradas las iniciativas de los productores rurales, en otras palabras, no existió una alimentación de abajo hacia arriba, debido a lo cual se desaprovecharon muchas oportunidades de reactivación de actividades nuevas y viejas que desarrollan las familias rurales (producción de panela, aguardiente, queso y lácteos, artesanía, etc).

Uno de los avances en la nueva conceptualización del desarrollo rural, es la aceptación de la importancia cada vez mayor otorgada a los aspectos educativos y organizativos de la población rural, hasta hace poco considerados como elementos secundarios en el diseño de los proyectos. De Janvry y Sadoulet, incluso llegan a plantear que el desarrollo rural solo será factible cuando exista una elevación del nivel de la enseñanza secundaria en la población rural. Este autor relaciona la educación rural con las posibilidades de los jóvenes para obtener empleo no agrícola bien remunerado, es decir “ para escapar de la pobreza por la vía de la emigración o de la pluriactividad” (2000 : 20). Otros, plantean que solo a partir de cierta acumulación en capital humano y social se puede aprovechar mejor el acceso al capital natural, productivo y financiero. La educación escolar, según Dirven “entrega conocimientos específicos, pero también tiene aspectos no cognoscitivos, como la capacidad de asimilación de nuevas ideas, el carácter competitivo y la voluntad de someterse a una disciplina que son directamente aplicables a la actividad económica productiva. Así mismo, la educación favorece la capacidad de búsqueda de información y su ordenamiento y sistematización...” (2001:17). Si bien en las áreas estudiadas, el nivel de la población sin educación había disminuido de un 17.4% al 15.2 %, todavía las mujeres seguían relegadas con una población analfabeta que llegaba al 18 % en el 2000. Este problema era más agudo sobre todo en las áreas de población indígena de la sierra, donde todavía existe una segregación de género en el acceso a este importante recurso. En general se puede afirmar que el acceso al capital cultural es todavía bajo: solo el 13.8 % de la población en edad escolar tenía acceso a la educación secundaria y el 1.6 % a la superior. Sin duda este desnivel educativo incide en las posibilidades de concretar cambios importantes en el modelo de gestión de las unidades productivas. ¿Cómo crear empresas campesinas con este nivel de educación? ¿Cómo asegurar sostenibilidad de las inversiones

¹⁷ La caña de azúcar es un cultivo importante para los campesinos de las áreas de las estribaciones de la cordillera occidental por dos razones principales: no demanda mucha mano de obra en el cultivo, pero sí en su procesamiento y sobre todo porque genera ingresos a lo largo de todo el año. En algunas áreas revisitadas del cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi, los campesinos estaban reactivando este cultivo que había sido marginalizado por los técnicos del PRONADER. (Visita de campo realizada en septiembre del 2001).

cuando todavía un 33 % de la población es analfabeta?. Lo que es meritorio es que en las condiciones actuales la población campesina no privilegia ni valora la educación en tanto “activo cultural” para sus hijos, factor que permitiría en el futuro asegurar un mejor nivel de competitividad de la economía campesina en el mercado. La pobreza induce a un uso prematuro de sus recursos humanos en tanto fuerza de trabajo con bajos niveles de productividad en la economía familiar (uso extensivo de la mano de obra familiar).

Tampoco existió una política explícita orientada hacia el fortalecimiento organizacional. En cada una de las áreas de intervención se trabajó únicamente con las organizaciones que demostraron apertura hacia el programa, sin preocuparse mayormente por sus características, su nivel de legitimidad¹⁸ y su cobertura. Dada la alta heterogeneidad de las organizaciones (comunales, cooperativas, asociaciones, micro empresas, grupos de mujeres, etc) las respuestas a las acciones del PRONADER también fueron muy desiguales. Así por ejemplo, en áreas donde existía un mayor nivel organizacional de corte tradicional (sierra) se incrementó la participación de la mujer, no obstante, se trataba de procesos de cambio todavía débiles, en la medida en que por ejemplo, las mujeres no asumían los cargos de dirección sino únicamente los secundarios (tesorera, secretaria, etc.).

La capacitación impartida a las organizaciones se concentró en eventos de corte agropecuario pero el número de eventos (entre 1 y 3 en promedio) realizados en los últimos cinco años, fue a todas luces insuficiente. El vacío organizacional que tenía el PRONADER, llevó incluso a la formación de grupos “específicos”, es decir grupos formados “ad hoc” para trabajar con el programa. Durante los últimos 5 años se crearon 137 grupos que respondían coyunturalmente a las ofertas del proyecto y tenían muy baja sostenibilidad.

En definitiva, la intervención del PRONADER, no significó ni la construcción ni el fortalecimiento de los niveles de capital social que existían en las áreas. Algunos autores consideran que las comunidades tienen una reserva de capital comunitario que podría ser movilizado por intervenciones exitosas externas, para crear un capital social allí donde antes éste no existía. Durston (1999:117), por ejemplo, señala que “la doble función de los agentes externos – como proveedores de las metodologías disponibles en este campo y como paraguas protector durante la fase de constitución de un actor social nuevo en el escenario microrregional- es esencial para que el capital social campesino se desarrolle con rapidez y seguridad”. El PRONADER, en cambio utilizó una parte de las energías organizativas de las comunidades a través del trabajo comunal (más importante en las áreas de la sierra, más débil en las de estribaciones y casi inexistente en las de la costa), pero en ningún caso se preocupó realmente de consolidar los niveles de capital social, ni tampoco de construir capital social allí donde éste era deficiente. Apostar al trabajo comunal como contraparte del desarrollo rural al parecer está llegando a un límite, puesto que actualmente es necesario revalorizar el trabajo campesino sobre todo en áreas donde el costo de oportunidad es más alto. El supuesto no siempre comprobado de que las organizaciones rurales pueden aportar trabajo comunitario en forma permanente está siendo cada vez más cuestionado, pues ni todas las áreas tienen el mismo nivel de organización ni todas las organizaciones tienen su base en el trabajo comunitario.

Finalmente, en cuanto al entorno institucional en el que se desarrollaba el programa es importante señalar que no existió una “sinergia” institucional que hubiera permitido la coordinación y el mejor aprovechamiento de la presencia de instituciones privadas de desarrollo (ONG) y de los múltiples proyectos que se implementaban paralelamente. Algunos factores que tienen que ver con el cambio del rol del Estado, la rotación del personal técnico, las interferencias políticas¹⁹, la parcelización del trabajo institucional privado (excesivo protagonismo, clientelismo, paternalismo) fueron limitantes que obstaculizaron una mejor coordinación con el PRONADER.

¹⁸ Así por ejemplo, el 29 % de las organizaciones investigadas no tenían estatutos y no eran reconocidas legalmente.

¹⁹ Hay que mencionar que sobre todo en el Gobierno de Sixto Durán Ballén (1990-1994), la politización del programa llevó a sacrificar incluso la propuesta técnica, puesto que muchos de los responsables técnicos de las áreas eran personas no calificadas para desempeñar estos cargos.

En definitiva este programa no era sostenible al no existir un proceso de apropiación por parte de las organizaciones beneficiarias.. Se desarrollaron más bien métodos de trabajo clientelares en la capacitación y asistencia técnica. Tampoco se invirtió en la creación de capital social ni capital humano, puesto que no eran considerados como elementos básicos de la sostenibilidad. Finalmente, no se trabajó con el horizonte de la transferencia, es decir, no existieron estrategias adecuadas de retiro del Estado y la creación de una nueva institucionalidad local con la participación de las organizaciones, los beneficiarios y demás actores locales.

4. Las tendencias de la Nueva Ruralidad y el desarrollo rural

En el ámbito de la región se ha empezado a discutir sobre la necesidad de renovar el aparato conceptual utilizado para el análisis del sector rural. Hay dos vertientes teóricas importantes: la primera liderada por organizaciones más vinculadas a la práctica agropecuaria que impulsan el concepto de “agricultura ampliada” para referirse al papel central que todavía siguen cumpliendo las actividades agropecuarias; la otra, es la que parte de la constatación del desarrollo de las actividades no-agrícolas y el papel subordinado de las actividades no agropecuarias. Sin entrar a discutir aquí, la validez de estas propuestas, es importante al menos discutir las siguientes tendencias relacionadas directa o indirectamente con el desarrollo rural.

La necesaria relectura de los procesos estructurales de la sociedad rural hoy en día.

Como lo hemos mencionado, la sociedad rural actual no es la misma de hace 20 o 30 años. El capitalismo ha penetrado profundamente los intersticios de la sociedad rural y ha generado procesos y dinámicas sociales que exigen un nuevo abordaje teórico-práctico. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay que mencionar la consolidación de una agricultura moderna orientada a los nuevos productos de exportación como flores, hortalizas y frutas exóticas (Damiani, 2000) que integra o subsume a la economía campesina en tanto mano de obra barata. En algunas áreas de la sierra, se ha generado un inédito proceso de proletarianización de indígenas que como lo hemos mencionado más arriba desarticula el funcionamiento de las organizaciones locales tradicionales como el cabildo. Igualmente es alarmante el nuevo proceso de concentración de la tierra, tanto sobre áreas de explotación comunal como sobre áreas ya ocupadas por campesinos beneficiarios de reforma agraria. Estudios recientes muestran cómo en la Península de Santa Elena (provincia del Guayas), existe el riesgo de que los comuneros pierdan progresivamente sus tierras frente al embate de los empresarios guayaquileños ávidos de tierras casi vírgenes y con riego. Procesos parecidos se desarrollan también en el noroccidente de Pichincha en tanto responden a la búsqueda de buenas tierras para nuevos productos de exportación (palmito, pimienta) o de integración vertical con empresas agroalimentarias que amenazan la estabilidad de antiguos colonos (Martínez, 2000).

No se puede desconocer tampoco la presencia de complicados procesos de diferenciación social que evidencian los límites de las intervenciones en desarrollo rural cuando actúan sobre el falso supuesto de la homogeneidad campesina. No sólo que hay una diferenciación social sino también una diferenciación productiva (Martínez, 1995). Así por ejemplo, se puede encontrar campesinos pobres, pero con actividades muy diversificadas o campesinos medios y ricos con estrategias agropecuarias más viables.

Distincuir claramente lo que es rural y lo que es agropecuario y no establecer una igualdad engañosa.

La dimensión agropecuaria es mucho más reducida que la rural, pero ha sido preferida por los proyectistas y hay que decirlo, también por los financistas del desarrollo rural. Ya hemos señalado la importancia actual de las actividades no agropecuarias, del pluriempleo, de la agricultura a medio tiempo o tiempo parcial, etc.(Trejos, 1998, Machado, 2000). Sin embargo, todavía se insiste en diseñar componentes agropecuarios incluso en áreas dónde los productores rurales están inmersos de lleno en otras actividades, simplemente éstas, se tornan “invisibles” y no son consideradas ni en el diseño ni en la

implementación de los proyectos. También hay que aclarar que los ingresos de los productores rurales en el ámbito de la región dependen cada vez más de las actividades no agrícolas o de fuera del hogar antes que de las actividades agropecuarias (De Janvry, 2000). En áreas de campesinos pobres esto es una realidad indiscutible, dado que para sobrevivir tienen necesariamente que trabajar en lo que puedan y dónde sea. La migración, el trabajo fuera de la parcela han sido satanizados como elementos desestructuradores de la idílica comunidad rural, pero en países como el Ecuador, muchas familias campesinas no podrían sobrevivir sin estos ingresos. Es importante, por lo mismo, “construir una imagen de ruralidad” más acorde con los actuales procesos de cambio que configuran una nueva sociedad rural, cuyas características todavía no han sido estudiadas²⁰.

El diseño de salidas viables para los campesinos pobres, aunque estas no entren dentro de la lógica agrarista y productivista.

No todos los productores rurales tienen las mismas posibilidades ni idénticas alternativas para salir de la pobreza. Dada la heterogeneidad de productores hay que diseñar también caminos diversos. Alain de Janvry (2000), plantea por lo menos cuatro caminos diversos: dos caminos para los pobres y dos para los viables. Para los primeros habría que considerar seriamente la emigración y para los “pobres estructurales” incluso la asistencia social; para los productores con recursos el camino agrícola y seguramente para la mayoría de campesinos pobres el de la pluriactividad. Esta perspectiva cambia totalmente el paradigma del desarrollo rural, puesto que si se busca trabajar con campesinos pobres, el paradigma agrícola es insuficiente. Lo más probable es que se terminará beneficiando al grupo de campesinos con más recursos y ampliando más la brecha de pobreza del mundo rural. Como este autor sostiene: “es necesario repensar sustancialmente el diseño institucional del desarrollo rural para incorporar la dimensión del ingreso extra agrícola en las estrategias de desarrollo rural” (Op. cit: 8).

El efecto más dramático que se vive en el Ecuador es el de la migración²¹. Si no se puede detener la migración, (con la actual política de tierras que pasa por el mercado), ¿no será mejor tratar de ordenar esta migración?. La migración puede ser una buena fuente de capitalización del campo, a través de las remesas que no se dirijan al consumo suntuario sino a la inversión productiva²². Seguramente los migrantes no quieren invertir más en una riesgosa agricultura, pero a lo mejor sí en otras actividades rentables. Pensar en la suerte de los pobres más allá de la localidad, exige también tener conocimiento de lo que sucede en la ciudad y en los destinos de la migración (mercado internacional) y a lo mejor preparar a la mano de obra para una inserción exitosa.

El manejo flexible de la relación campo-ciudad.

No pueden existir más proyectos sólo para la dimensión rural sin considerar los nexos con la ciudad. En un país como el Ecuador esto es más que evidente (pero todavía la geografía es marginal en el diseño de los proyectos), dada la impresionante proximidad física, económica y social entre el campo y la ciudad, entre regiones y micro regiones. Las regiones con más cercanía campo-ciudad en el Ecuador parecen tener mayores posibilidades de escapar de la pobreza, lo que indica claramente que el efecto ciudad o urbanización del campo no es necesariamente negativo. Este puede ser el caso de provincias como Tungurahua, Azuay, Imbabura con importantes procesos de connurbanización que indudablemente han transformado el hinterland rural y han creado complejas redes de intercambios no solo económicos sino también sociales, culturales y políticos.

²⁰ Según Entrena Durán: “como cualquier otras construcción social, la ruralidad tiene una naturaleza reflexiva; es decir, es el resultado de acciones (o está condicionada por ellas) de sujetos humanos que tienen la capacidad de interiorizar, debatir o reflexionar acerca de las circunstancias y requerimientos socioculturales que en cada situación espacio-temporal se le presentan” (1998:77).

²¹ Se calcula que en el exterior vivirían unos 300.000 ecuatorianos, la mayoría de los cuales habrían migrado en los tres últimos años.

²² Es conocido, por ejemplo que las remesas de los campesinos de las provincias de Azuay y Cañar, son destinadas para la construcción de casas de tipo urbano que ni siquiera son utilizadas para vivienda, pero en cambio cumplen un papel importante como fuente de prestigio social.

Algunos de los cuellos de botella de los proyectos de desarrollo rural, como por ejemplo el crédito y la comercialización, no tienen solución si no se incorpora la dimensión urbana. Los campesinos y productores rurales también construyen el espacio urbano, especialmente de las ciudades pequeñas e intermedias con su presencia en las ferias, con la creación de toda una red de relaciones sociales y hasta con el impulso de nuevas actividades²³.

Las relaciones campo-ciudad son muy cambiantes y dinámicas. Actualmente existen pueblos y comunidades que son únicamente dormitorios de trabajadores de la ciudad, pero igualmente hay trabajadores del campo que viven en la ciudad. El sector rural empieza a ser objeto de otros usos, por ejemplo del turismo o de residencia secundaria y se genera una demanda del espacio rural por habitantes urbanos y por el capital extra agrario (Etxezarreta,1997).

Aprender a utilizar la perspectiva micro-regional.

Dado que los procesos económico-sociales desbordan el ámbito local y se cristalizan en el ámbito micro regional que va más allá de los objetivos de los proyectos. Esta perspectiva sentará las bases para entender la vinculación con lo global a partir de la diversidad de lo local. Según Elena Sarraceno, se debe “reconocer y usar la diversidad como factor estratégico de desarrollo. En este sentido, cada área puede conseguir ventajas a partir de la identificación de un camino propio hacia el desarrollo y la competitividad, y ambos pueden variar de un caso a otro y en el tiempo. Fórmulas comunes para áreas menos desarrolladas y enfoques de arriba abajo, parecen inadecuados, porque llevan a la percepción de las especificidades locales como irrelevantes y a una versión simplificada y estandarizada de la estructura social y económica e ignoran su carácter único, que puede convertirse en una ventaja competitiva estratégica” (2000:148). Lo local desde esta perspectiva es una fortaleza antes que una debilidad. En el territorio se construyen procesos endógenos que sientan las bases de caminos distintos de desarrollo de otras áreas. La diversidad espacial se convierte en una fortaleza que puede ser aprovechada por los mismos productores rurales.

Descubrir las iniciativas de los campesinos y productores rurales como la base para la elaboración de proyectos viables.

Normalmente, se desprecia o no se visualiza estas iniciativas para privilegiar el diseño “técnico” que repite las pequeñas recetas de moda, muchas de las cuales vienen desde fuera y desde arriba y no tienen mucho que ver con lo que hacen los productores. Es bastante probable que en muchas áreas se haya impulsado lógicas productivas que han significado un proceso regresivo o de estancamiento económico, cuando se ha marginado procesos que no entraban en la oferta técnica.

Otro elemento que hay que considerar es que muchas de estas iniciativas han sido respuestas flexibles que se han construido lentamente por parte de los productores aprovechando los nichos de mercado y ciertas condiciones que provenían de una mejor distribución del recurso tierra, sin ayuda ni del Estado ni de las ONG. La combinación entre pequeña agricultura y trabajo a domicilio o artesanal, por ejemplo, es un ejemplo concreto de este proceso que se cumple aún hoy día en varias provincias de la sierra (Tungurahua, Imbabura, Azuay). Es interesante comprobar la similitud con otros procesos, por ejemplo, el caso italiano, donde la presencia de pequeñas explotaciones ha dado paso a la economía de la diversificación (noroeste de Italia). Así, según Elena Sarraceno, “...la enseñanza es que la persistencia de la pequeña estructura agrícola cumple una función tanto en las etapas iniciales del desarrollo –ofreciendo subsistencia y residencia a la población rural o local y reduciendo la migración definitiva- como en sus etapas intermedias y finales, brindando recursos humanos para las iniciativas empresariales endógenas y la diversificación de actividades no agrícolas” (2000:151). Esto es justamente lo que se dio en el caso Tungurahua al menos en su fase inicial y aunque no haya logrado evolucionar hacia la fase empresarial,

²³ En una reciente visita a Santa Isabel, la migración había creado hasta 6 casas de cambios y de “courier”, para atender la demanda de la población campesina. Visita de campo, 20 de abril del 2001.

la combinación entre pequeña agricultura y empresa familiar todavía permite a su población enfrentar los resultados desastrosos de la dolarización y la desprotección del Estado (North, 2000, Martínez, 2000).

5. La construcción del capital social.

El capital social viene siendo objeto de una amplia discusión tanto entre el medio académico como entre los “policy makers” no solo de los países avanzados sino también en América Latina. Si bien es un concepto acuñado al interior de la sociología, rápidamente ha pasado a ser utilizado por las diversas disciplinas sociales sobre todo después del trabajo de Robert Putnam (1994) sobre el caso italiano y más tarde americano. A partir de este trabajo, se desarrolló una verdadera avalancha de estudios sobre el capital social desde diversas perspectivas que no siempre han enriquecido el análisis teórico y menos su aplicabilidad práctica en el qué hacer del desarrollo rural. Así por ejemplo, no hay consenso en la definición del término ni tampoco en su medición, de tal forma que corre el riesgo de convertirse en un “cajón de sastre” válido para apoyar tanto planteamientos retrógrados como progresistas.

Dejando a un lado la discusión sobre las diversas concepciones y aproximaciones teóricas del capital social, en este trabajo se adopta preliminarmente los planteamientos más interesantes que se discuten actualmente en América Latina. En un reciente trabajo, Durston (2001:1), define al capital social “como el contenido de ciertas relaciones sociales: las que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación, que proporcionan mayores beneficios para aquellos que lo poseen que lo que podría lograrse sin este activo”. Se trata de un acercamiento al concepto que lo ubica en el contexto de las relaciones sociales en las cuales los individuos, comunidades y grupos de comunidades despliegan a través de la confianza, reciprocidad y cooperación relaciones internas y/o externas la potencialización de este activo. Esta definición recupera la propuesta de Bourdieu en una doble dimensión: primero, que estas relaciones se establecen en campos sociales (1995) muy concretos (desde la familia a una OSG, pasando por la comunidad) y segundo, que se trata de un activo, una “especie de capital” (1980:56), pero capital al fin que puede ser utilizado positiva o negativamente por sujetos individuales o colectivos.

Actualmente, el estado de la cuestión en América Latina indica que se están realizando los primeros intentos por estudiar el capital social en acción, es decir aplicado a una realidad campesina – indígena donde se supone que existiría una gran potencial dado que es el terreno fértil para la práctica de las relaciones de reciprocidad, cooperación y solidaridad. No obstante, Durston , advierte que a pesar de que la comunidad rural es un ambiente ideal para el surgimiento del capital social, “es importante no caer en un romanticismo bucólico acerca de la vida rural, evitando el comunitarismo y el campesinismo como visión idealizada” (2001: 18). Igualmente, Dirven, que mantiene una posición más escéptica señala que “ en el ideario latinoamericano, la población campesina y más aún la indígena, son consideradas como los grupos donde el capital social se da por excelencia. Sin embargo, los que trabajan directamente con ellos tiene una visión menos idealizada, en donde el individualismo, los conflictos, las relaciones de poder y de clientelismo prevalecen o son suficientemente frecuentes para no ignorarlos” (2001: 10). Así pues, vale la pena bajarse al terreno de los hechos para ver cuál es el contenido real del capital social en las comunidades indígenas.

En el caso ecuatoriano, recientemente se realizaron varios estudios en OSG ubicadas en áreas indígenas, uno de los cuales (el caso TUCAYTA en la provincia de Cañar, en la sierra sur del Ecuador) se analiza en este trabajo²⁴.

La TUCAYTA (Tucuy Ayllucunapac Tantanacuy) fue fundada en 1984 como contraparte del proyecto de riego Patococha. Logró su legalización en 1994 y actualmente aglutina a 15 comunidades y 7 cooperativas, con un total aproximado de 5.000 habitantes. Esta organización tuvo la enorme ventaja de ser beneficiaria de la transferencia del Proyecto de Riego Patococha desde CESA, una Organización No

²⁴ Estos estudios fueron realizados en la UNORCAC de Cotacachi en la Provincia de Imbabura, en las UNOPAC de Ayora en la Provincia de Pichincha, en la OJAG de Guamote en la Provincia de Chimborazo y en la TUCAYTA de Cañar en la Provincia de Cañar entre los años 2000-2001. Los estudios fueron coordinados por Tomas Carroll y Anthony Bebbington.

Gubernamental (ONG) que había trabajado en la zona por el lapso de 14 años. En este sentido es una clara muestra de "capital social inducido". Esta transferencia igualmente se ha dado en un contexto en que la participación campesina ha asegurado su continuidad. Este es un factor que ha incrementado la autoestima y autoconfianza de la organización y ha creado las bases de su sostenibilidad mismo desde la perspectiva empresarial.

No hay que olvidar que en la zona existía una base organizativa creada en torno a la lucha por la tierra en los años 60 que se transformó más tarde en una "contraparte" del trabajo de la ONG (1984) en una primera etapa y luego, una vez realizada la transferencia del proyecto (1998) en una organización que maneja el riego. En este sentido se puede hablar también de capitalización de la "energía social" (Hirschman, 1988) entendida como cierta capacidad organizativa que puede manifestarse positivamente en coyunturas favorables.

El caso de la TUCAYTA es interesante desde la perspectiva de la relación entre capital social y otras formas de capital, sobre todo el humano y el económico (Bourdieu, 1995). En la medida en que se transfiere el riego desde CESA a la OSG, se transfiere también un capital económico nada despreciable. Por lo mismo, esta transferencia no es el resultado de una gestión social de la organización y en esta medida, dispone de un capital económico que puede ser aprovechado como palanca para consolidar otros capitales, entre ellos el mismo capital social. Hasta 1998, año de la transferencia del Proyecto de riego, todavía existía cierta "desconfianza" entre la organización y lo que restaba del proyecto, indicador de que la transferencia no se dio como un proceso de acumulación de capital social en el manejo del riego, sino como una exigencia de la financiera. Pero esta situación no obsta para que a partir del manejo del riego se pueda impulsar procesos de consolidación de capital social. Es más, la TUCAYTA se encuentra en inmejorables condiciones para incrementar su capital social a través del riego, pues en torno al agua hay demanda, consenso social, importantes niveles de organización y es una actividad permanente hacia el futuro.

Consideramos que es un error creer que por que existen organizaciones campesinas ya está consolidado el capital social. Las organizaciones pueden surgir por múltiples motivos, entre otros, por la misma presencia de proyectos de desarrollo que demandan una contraparte local para poder actuar en el medio indígena. Indudablemente, esto no es expresión de capital social, y a lo más se trata de un capital social espúreo: cuando se acaba el proyecto se acaba también la organización. Este ha sido el denominador común en el aspecto organizativo del desarrollo rural en el Ecuador.

Así pues el "boom" organizacional es una apariencia de capital social. Más importante es analizar cuál es el estado actual de las redes de solidaridad – reciprocidad en las comunidades de base y entre las familias. Allí se encuentran actualmente enormes fisuras, desgaste o decadencia. Las condiciones objetivas a las cuáles se ven enfrentadas las familias para sobrevivir, impulsan a esta situación. Esto es lo que sucede actualmente en las comunidades aledañas a las plantaciones de flores de Cayambe. Tabacundo (Provincia de Pichincha), Otavalo, Cotacachi (Provincia de Imbabura). Allí, los Cabildos en tanto expresión tradicional de la organización comunal, tienen enormes dificultades para actuar, pues el ritmo del trabajo de los asalariados en las plantaciones de flores no permite la práctica de formas tradicionales de reciprocidad andinas (la minga, el prestamano y otras) que se creían la base del funcionamiento de estas comunidades indígenas.

El caso de la TUCAYTA muestra las debilidades y potencialidades de una organización indígena de segundo grado de la sierra ecuatoriana. Siguiendo el modelo planteado por Durston (2001), se puede analizar las tres instancias de acumulación de capital social: el nivel familiar, el comunal y el supracomunal (OSG).

A nivel familiar, no hay duda que todavía funcionan las relaciones de solidaridad y reciprocidad. No obstante, la migración genera problemas en las relaciones de reciprocidad al desequilibrar la dotación de mano de obra de las unidades domésticas. Debido a ello, las actividades agrícolas se reducen al ámbito

estrictamente familiar y se privilegia de esta manera la agricultura de invernadero que no necesita de apoyos externos de mano de obra²⁵.

El nivel comunal implica la vigencia de relaciones de confianza entre unidades domésticas y la práctica de relaciones de reciprocidad sobre la base del intercambio de mano de obra para ciertas fases del cultivo en que se requiere de una mayor dotación de trabajo. En cambio, la solidaridad se manifiesta en el trabajo comunal denominado "minga" y que es solicitado por la autoridad comunal o por las redes parentales de acuerdo a sus necesidades. Lo que se observa es que hay una situación de crisis generalizada de estas redes de capital social comunal, debido también a la migración y a la pérdida de importancia de la agricultura extensiva a favor de una más intensiva reducida al ámbito familiar. Tanto la oferta, como la demanda de mano de obra en las unidades domésticas se limita al ámbito familiar, más allá del cual se torna una actividad que no tiene ventajas económicas claras.

Cuadro N° 1
Cambios en los niveles de cooperación en la TUCAYTA

Niveles de cooperación	Dentro de la comunidad		Entre comunidades	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Disminuído	19	76	9	45
Igual	3	12	5	25
Aumentado	3	12	6	30
Total	25	100	20	100

Fuente: Investigación de campo, agosto, 1999.

Estos datos muestran fehacientemente una situación de deterioro de la cooperación dentro de la comunidad como entre comunidades. No todas las familias practican lo que se supone es la norma andina de reciprocidad en el trabajo (*randinpac* o *prestamanos*) y tampoco lo hacen entre comunidades a través de la minga. Los datos ofrecen la visión de un estado crítico de los niveles de cooperación andinos, por lo mismo, no se puede partir del presupuesto de un "óptimo de cooperación y reciprocidad" cuando se analiza el capital social en la población indígena.

De las 18 familias que respondieron que la cooperación había disminuido en las comunidades, el 50 % atribuyó a una causa de trabajo como *la migración*. Efectivamente, es muy difícil que se den relaciones de reciprocidad cuando no hay seguridad de cumplir con las reglas básicas, esto es de retornar el trabajo prestado cuando otra unidad doméstica lo necesite. Otra causa importante es el *individualismo* que sin duda está relacionado también con las prácticas productivas de tipo mercantil que han sido muy difundidas entre las familias comuneras. No obstante esto no significa que las prácticas más individualistas de las familias sean un obstáculo para adscribirse a una organización y los datos también llaman a la reflexión en el sentido que no siempre el desgaste de sistemas solidarios o de reciprocidad en el ámbito de las familias o entre familias y comunidades acarrea una "debacle" organizacional. De hecho las Juntas de Agua en áreas mestizas de la sierra funcionan muy bien a pesar del marcado individualismo en las prácticas familiares.

En el nivel supracomunal, es decir de la OSG, los conflictos entre bases y dirección campesina aparecen más nítidamente, en la medida en que la visión de la dirigencia no responde a los intereses de las bases de una forma directa. La dirigencia parte del supuesto no comprobado de que existen tres instancias que funcionan eficientemente: familias, comunidades y OSG. Al igual que los teóricos más utopistas del capital social, se cree que la organización comunal se convierte en la bisagra estratégica que articula las demandas de las bases con la dirección de la OSG. En realidad, no se analiza cuál es la solidez actual de la organización comunal. En el caso de la TUCAYTA, por ejemplo, las comunidades más grandes se encuentran en un franco proceso de descomposición interna, debido al crecimiento poblacional y a la

²⁵ En una entrevista realizada a Fidel Guamán, éste señaló que el trabajo en el invernadero tiene varias ventajas: se necesita menos tierra, menos trabajo y es más rentable. (Comunidad de Cuchucún, 27 de mayo de 1999).

búsqueda de nuevas formas organizacionales más acordes con la misma dinámica productiva familiar. En otras, las autoridades comunales (el cabildo) ya no viven en la misma zona (son migrantes) y no pueden cumplir con las tareas encomendadas, principalmente vincular las directrices con las demandas de base.

Otro indicador que modifica la visión idealizada de una comunidad es el análisis de los conflictos presentes tanto su interior como entre ella y la OSG. Con respecto a los conflictos internos a las comunidades, se pueden señalar los más importantes que pueden tener repercusión en el ámbito de la misma OSG.

En primer lugar, en algunas comunidades existe un proceso de fragmentación interna, lo que significa que la comunidad se ha subdividido en varios sectores, con lo cual el cabildo pierde representatividad y poder real. En segundo lugar existen conflictos entre las familias que tienen agua y las que no tienen, es decir que la inequidad en el riego incide negativamente en el consenso comunal; estos problemas repercuten ciertamente en el manejo del riego. En tercer lugar, en la comunidad hay muy poca participación de los jóvenes. El horizonte de ellos está fuera de la comunidad y por lo mismo la no-permanencia en la comunidad incide en su poca participación en el cabildo, la vida cultural y productiva de la comunidad.

Los conflictos externos, es decir con instituciones de desarrollo no son numerosos. Se menciona con frecuencia los conflictos que se dieron con Plan Internacional (ONG) y también los conflictos religiosos entre católicos y evangélicos, que existen en forma latente en las comunidades y que han causado una división entre las familias.

En cambio se evidencia la presencia de conflictos moderados con la OSG, que giran en torno al riego. En primer lugar se menciona el conflicto por las tarifas elevadas de agua²⁶. A las familias les parece muy altas las tarifas impuestas por la TUCAYTA y en la comunidad de Quilloac, por ejemplo se exgrimían argumentos sobre un manejo poco eficiente del riego: mala distribución del recurso, se exige pago aún a los que no reciben el agua, los responsables del manejo del agua no cumplen su papel a cabalidad, no hay seguimiento de los técnicos. Por otro lado, las familias tienen visiones interesantes sobre la OSG: tendencia hacia el autoritarismo, falta de democracia en las decisiones, cierto temor a los líderes y a sus decisiones, etc. Con respecto a la educación de los hijos en las escuelas bilingües, como ya lo hemos mencionado, hay ciertamente descontento en algunas comunidades. Los profesores no quisieron coordinar con la comunidad y al menos en Quilloac 10 a 20 familias dejaron de enviar sus hijos a las escuelas que son respaldadas por la TUCAYTA.

Así pues, si bien existen formalmente estos tres niveles en los cuales se puede acumular capital social, en la práctica, cada uno de ellos tiene serias fisuras y no conforman una sólida argamasa que pudiera ser la evidencia de un capital social acumulativo de abajo hacia arriba, modelo con el cual sueñan muchos analistas del capital social (Bebbington y Carroll, 2000).

La presencia del liderazgo es otro elemento importante en la tarea de construcción del capital social en la OSG. En efecto, sorprende encontrar en esta zona campesina la presencia de un colegio bilingüe²⁷, de profesionales indígenas organizados, de asociaciones de productores que no necesariamente se encontraban vinculados con la organización de segundo grado. Esto mostraba que la población indígena desplegaba muchas iniciativas que respondían tanto a intereses familiares como gremiales que desbordaban los objetivos de la OSG. Esto ha generado puntos de conflicto entre bases y OSG, por ejemplo en torno a la eficiencia de la educación bilingüe, lo que sacó a flote las limitaciones democráticas de la dirigencia²⁸.

²⁶ En 1998 se cobraba a 75.000 sucres la hectárea, mientras que en 1999 subió a 108.000 sucres por hectárea.

²⁷ Se trata del Colegio Bilingüe "Quilloac" que sin duda ha creado muchos cuadros indígenas, pero que no se articula orgánicamente con la OSG.

²⁸ Algunas familias indígenas decidieron sacar a sus niños de las escuelas bilingües para enviarlos a la escuela de la ciudad de Cañar, argumentando la baja calidad de la enseñanza, frente a lo cual, el presidente de la OSG, amenazó con quitarles el beneficio del riego.

El actual stock de capital social puede incrementarse fácilmente a condición de dar una respuesta adecuada a las actuales demandas productivas de las bases, lo que significa aceptar un funcionamiento menos piramidal pero más efectivo considerando nuevas alternativas organizacionales que rebasan a los Cabildos. Así por ejemplo, la formación de asociaciones en las comunidades grandes, la formación de asociaciones de profesionales, la necesidad de organizar a la juventud y a las mujeres, etc. El aprovechamiento del capital humano es otra de las prioridades y finalmente la construcción de un capital económico y financiero propio dadas las nuevas e interesantes condiciones que han surgido: capacidad de ahorro, remesas de migrantes, etc. El caso de la TUCAYTA muestra que los mecanismos tradicionales de representación de la población indígena tienen serios límites para enfrentar las nuevas condiciones de inserción en el mercado, pero que existen alternativas ya dadas en su interior, hace falta simplemente reactivarlas e implementar formas más flexibles de relación entre dirigencia y bases.

Hay dos procesos que se desprenden del análisis de la TUCAYTA:

- a) el capital social no es previa condición para acumular otros tipos de capital
- b) es el capital económico acumulado el que permite un mejor horizonte de sostenibilidad de la organización, puesto que a partir de este pueden mejorar notablemente los otros indicadores de capital social (intermediación, enlaces, manejo de recursos) y obtener una sostenibilidad económica, social y financiera a más largo plazo.

La construcción de las OSG tampoco garantiza de por sí la presencia de capital social, dadas las serias limitaciones en sus relaciones con las bases y la tendencia a prácticas antidemocráticas y clientelares. Se han construido más OSG para captar recursos que como resultado de una dinámica social de abajo hacia arriba. Pero allí donde esto último funciona, existen mejores bases para la construcción del capital social. Por último, es necesario además construir un capital humano que mire más allá de la tradición, de lo local, y que se oriente a prácticas pluralistas y de tolerancia.

8. Algunas conclusiones.

Los esfuerzos institucionales realizados en la última década en materia de desarrollo rural, no han generado los cambios esperados en el conjunto de la heterogénea población campesina beneficiaria. Por lo mismo, es necesario incorporar nuevos criterios que recojan las experiencias implementadas por el Estado, ONG e instituciones de desarrollo y permitan elaborar nuevos paradigmas más vinculados con los procesos que actualmente se dan en la sociedad rural.

En este sentido planteamos que el desarrollo rural en la nueva concepción implica definir bien los roles que tendrán los diversos grupos de productores rurales en el futuro. No hay un campesinado homogéneo y no por ser pobres todos son iguales. Estos grupos van a luchar por las ofertas de cualquier proyecto y algunos van a ser claramente propositivos frente a otros que serán meros espectadores o receptores. ¿Cómo hacer para que el desarrollo sea equitativo en condiciones de alta diferenciación social? Este es uno de los retos más importantes para el futuro de los proyectos de desarrollo rural que se implementen en el país.

El desarrollo rural para que tenga impacto en la población pobre necesariamente debe considerar las actividades no agrícolas como una fuente importante de ingresos y empleo de las unidades familiares. Los pobres mientras menos activos posean, más se insertarán en estas actividades dentro o fuera del hogar. Impulsar este tipo de actividades es una mejor inversión que únicamente apoyar las actividades agropecuarias.

La perspectiva rural-urbana y la incorporación de ciudades pequeñas o medianas en la lógica del desarrollo rural es hoy día una necesidad. Se debería hablar de desarrollo rur-urbano, dada la tendencia hacia una mayor articulación física, económica y social entre el campo y la ciudad. La nueva concepción del desarrollo rural debería también recoger y procesar las nuevas inquietudes que provienen del mundo urbano (crisis de las actividades modernas y aumento del desempleo), así como las nuevas demandas de

ciertos sectores sociales (sobre la ecología, el paisaje y el turismo) y la búsqueda de calidad en la producción agropecuaria.

La perspectiva regional debería ser la base de la concepción de nuevas acciones que puedan impulsar la diversidad en su más amplia concepción antes que la homogeneidad, como factor estratégico del desarrollo. El ámbito territorial regional presenta además ventajas de escala para proyectos productivos inviables en la escala micro local. En este contexto también hay que considerar las iniciativas económicas de los productores que normalmente responden a incentivos de mercados regionales dinámicos.

Hay de todos modos una fortaleza que puede equilibrar las tendencias hacia la inequidad y está dada por el capital social latente entre los diversos grupos de productores y en sus organizaciones. Habría entonces que estar más atentos a este factor, para escuchar las propuestas de “abajo hacia arriba”, las iniciativas que no calzan en el diseño de los proyectos y las demandas que pueden parecer fuera de foco. En definitiva articular más el discurso técnico con la realidad, un problema que ha sido una constante en los fracasos del desarrollo rural en Latinoamérica.

El capital social no es de ninguna manera la panacea de moda que permite sortear la inequidad en la distribución de los recursos sobre todo en tierra y capital. El proceso de construcción del capital social en las OSG es sin duda importante y dependerá mucho de la flexibilidad de la dirigencia en procesar los cambios que se han dado a nivel de individuos, familias y comunidades y que no siempre apuntan en la dirección idílica de un mundo rural comunitario. El análisis de caso realizado sobre la experiencia de una OSG indígena en el manejo del riego muestra claramente el desgaste de las prácticas de reciprocidad y cooperación en situaciones en que la práctica de “lo económico” también se ha modificado y exige nuevas respuestas por parte de las familias comuneras. Sin embargo, la OSG tiene en sus manos un capital económico importante que puede ser utilizado para fortalecer el capital social aunque ello signifique ir más allá de las prácticas estrictamente comunitarias.

Finalmente, en un país como el Ecuador, hasta ahora los esfuerzos realizados para disminuir la pobreza rural han fracasado, por lo mismo, una gran parte de la población ha quedado excluida del desarrollo. En la medida en que no se vislumbra propuestas que sean verdaderas alternativas para estos productores que sin duda son la mayoría en el medio rural, lo más probable es que buscarán salidas en la arena de la política que los impulse a cuestionar el modelo de economía actualmente imperante²⁹.

Bibliografía

Banco Mundial, Ecuador Poverty Report, Vol II, Working Papers, November, 1995.

Bebbington, Anthony., “Movements, modernizations and markets. Indigenous organizations and agrarian strategies in Ecuador”, en, Richard Peet and Michael Watts, Liberation Ecologies, Routledge, London, 1996.

Bebbington, Anthony J y Carroll, Thomas F., Induced social capital and federations of the rural poor, World Bank, Social Capital Initiative, Working paper N° 19, march, 2000.

BID, Estrategia para la reducción de la pobreza rural, N° ENV-122, Washington, D.C, junio, 1998.

Bretón, Víctor., Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los andes ecuatorianos, FLACSO, sede Ecuador, Universitat de Lleida, Quito, 2001.

Bourdieu, Pierre., Questions de Sociologie, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980

²⁹ La población rural pobre liderada por el movimiento indígena de hecho ha estado presente en los importantes levantamientos del 90 y 94 y en la movilización del año 2000 que significó la caída de Mahuad.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J.D., *Respuestas por una antropología reflexiva*, Grijalbo, México, 1995.

Buendía Martínez, Inmaculada., "Desarrollo Rural en la Unión Europea: el programa LEADER y el papel de las sociedades cooperativas", en *Cuadernos de Desarrollo Rural*, N° 42, Bogotá, 1999.

Clemens, Harry y Ruben, Raul., "Nueva ruralidad y políticas agrarias en América Latina. Hacia una perspectiva de gobernabilidad para el desarrollo rural", en *Nueva Sociedad*, N° 174, Caracas, julio-agosto, 2001.

Contreras O, Enrique., "Empoderamiento y Desarrollo Local", en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, N° 4, Universidad Austral de Chile, Valdivia, enero-agosto, 2000.

Damiani, Octavio., *El Estado y la agricultura no tradicional de exportación en América Latina*, Lecciones de tres estudios de caso, BID, Serie de Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible, septiembre, 2000.

De Janvry, Alain y Sadoulet, Elizabeth., *Cómo transformar en un buen negocio la inversión en el campesinado pobre: nuevas perspectivas de desarrollo rural en América Latina*, BID, 24 de marzo, 2000.

Dirven, Martine., *El cluster: un análisis indispensable...una visión pesimista*, Artículo presentado en el X Congreso Nacional de Estudiantes de Economía "Economías territoriales, instituciones y ética. ¿Crisis de paradigmas en economía. Hacia dónde vamos?. Universidad Nacional San Antonio Abad, Cuzco, Noviembre, 2000.

Dirven, Martine., *Entre el ideario y la realidad: capital social y desarrollo agrícola, algunos apuntes para la reflexión*, CEPAL, septiembre, 2001.

Durston, John, "Construyendo capital social comunitario", en *Revista de la CEPAL*, N° 69, Santiago, diciembre de 1999.

Durston, John., *Capital social: parte del problema, parte de la solución. Su papel en la persistencia y en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe*, CEPAL, septiembre, 2001.

Echeverría, Rubén G., "Opciones para reducir la pobreza rural en América Latina y el Caribe", en *Revista de la CEPAL*, N° 70, Santiago, abril, 2000.

Echeverría, Rubén G., "Un creciente interés en lograr mercados de tierras rurales más efectivos", en *Políticas Agrícolas, Número Especial, Los mercados de tierras rurales en América Latina*, REDCAPA, Bogotá, 2000.

Entrena Durán, Francisco., "Viejas y nuevas imágenes sociales de ruralidad", en *Estudios, Sociedade e Agricultura*, N° 11, outubro, 1998.

Etxezarreta Zubizarreta, Miren., "Las políticas de desarrollo rural integrado y la agricultura familiar", en Víctor Bretón, Francisco García, Joseph Mateu, (Coords), *La agricultura familiar en España, Estrategias adaptativas y políticas agropecuarias*, Ediciones Universitat de Lleida, 1997.

Gómez E, Sergio., "Organizaciones rurales en América Latina (marco para su análisis)", en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, N° 4, Universidad Austral de Chile, Valdivia, enero-agosto, 2000.

Jaramillo, Carlos Felipe., "El mercado rural de tierras en América Latina: hacia una nueva estrategia", en *Políticas Agrícolas, Número Especial, Los mercados de tierra rurales en América Latina*, REDCAPA, Bogotá, 2000.

Hirschman, Albert O., "The principle of conservation and mutation of social energy", in, Sheldon Annis and Peter Hakim (eds), *Direct to the Poor. Grassroots Development in Latin America*. Boulder & London, 1988.

Kay, Cristóbal., "El desarrollo excluyente y desigual en la América Latina Rural", en, *Nueva Sociedad*, N° 137, Caracas, mayo-junio, 1995.

Kliksberg, Bernardo., "Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo", en, *Revista de la CEPAL*, N° 69, Santiago, diciembre, 1999.

Krishna, Anirudh, Uphoff, Norman, Esman, Milton J., *Reasons for Hope. Instructive experiences in rural development*, Kumarian Press, 1997.

Lefeber, Louis., "Políticas agrícolas y desarrollo rural en el Ecuador", en, Luciano Martínez (comp.), *Antología de Estudios Rurales*, FLACSO, Quito, 2000.

Link, Thierry., *El campo en la ciudad: reflexiones en torno a las ruralidades emergentes*, .Universidad de Toulouse II, 2001.

Machado C, Absalón., "¿Reforma agraria o reforma rural?", en, *Análisis Político*, N° 40, Universidad Nacional de Colombia, mayo-agosto, 2000.

McMichael, Philip., " Reconsiderar la globalización: otra vez la cuestión agraria", en , *Revista Mexicana de Sociología*, 4198, Año LX, N° 4, octubre-diciembre, 1998.

Martínez Valle, Luciano., *Los campesinos- artesanos en la sierra central: el caso Tungurahua*, CAAP, Quito, 1994.

Martínez Valle, Luciano., "El desarrollo rural: limitaciones y alternativas", en, *Desarrollo Rural en los Andes*, ALOP, 1995.

Martínez Valle, Luciano (Compilación y Edición), *El desarrollo sostenible en el medio rural*, FLACSO, Quito, 1997.

Martínez Valle, Luciano., "Organizaciones de Segundo Grado, Capital Social y Desarrollo Sostenible", en, *ICONOS*, N° 2, FLACSO, Quito, mayo-junio, 1997.

Martínez Valle, Luciano., " La nueva ruralidad en el Ecuador", en, *ICONOS*, N° 8, FLACSO, Quito, junio-agosto, 1999.

Martínez Valle, Luciano., *Caracterización de la situación de la tenencia y regularización de la tierra*, Informe sobre el estudio, PSA-IICA, Quito, febrero, 2000.

Martínez Valle, Luciano., *Economías Rurales: actividades no agrícolas*, CAAP, Quito, 2000.

Martínez Valle, Luciano., *El capital social en la TUCAYTA*, Provincia del Cañar, Ecuador, en prensa, marzo, 2001.

Mena, Norma., *Impacto de la floricultura en los campesinos de Cayambe*, IEDECA, Quito, 1999.

Moyano Estrada, Eduardo, "Nuevos problemas y nuevas políticas de desarrollo rural", en, Kepa Fernández de Larrinoa, *La cosecha pendiente. De la intervención económica a la infraestructura cultural y comunitaria en el medio rural*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000.

North, Liisa., “¿Qué pasó en Taiwán?, un Relato de la Reforma Agraria y de la Industrialización Rural”, en, Luciano Martínez (ed), El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, FLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, N° 2, Quito, 1997.

North, Liisa L y Cameron John D., “Grassroots – based rural development strategies Ecuador in comparative perspective”, en, World Development, Vol 28, N° 10, Elsevier Science Ltd, 2000.

Pérez Iruela, Manuel y otros., La nueva concepción del desarrollo rural: estudio de casos. Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto de estudios sociales avanzados de Andalucía, Córdoba, 2000.

Perreault, Thomas A y Bebbington, Anthony J., “Indigenous irrigation organizations and the formation of social capital in northern highland Ecuador”, en, Yearbook, conference of Latin Americanist Geographers, Vol 24, 1998.

Putnam, Robert D., Para hacer que la democracia funcione, Editorial Galac, Caracas, 1994.

Piñero, Martín et alii., La institucionalidad en el sector agropecuario de América Latina, BID, Serie de Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible, noviembre, 1999.

Rubio, Blanca., “La agricultura latinoamericana. Una década de subordinación excluyente”, en, Nueva Sociedad, N° 174, Caracas, julio-agosto, 2001.

SAPRI, Evaluación de los impactos económicos y sociales de las políticas de ajuste estructural en el Ecuador, 1982-1999, SAPRI-Ecuador, Quito, mimeo, febrero del 2001.

Sarraceno, Elena., “Vínculos urbano-rurales, diversificación interna e integración externa: la experiencia europea”, en, Debate Agrario, N° 32, CEPES, Lima, febrero, 2001.

Schejtman, Alexander., “Las dimensiones urbanas en el desarrollo rural”, en, Revista de la CEPAL, N° 67, Santiago, abril, 1999.

Trejos, Rafael A., “ La nueva institucionalidad para el desarrollo rural: consideraciones para su contribución”, en, Perspectivas Rurales, Año 2, N° 2, Costa Rica, septiembre, 1998.

Vogelgesang, Frank., “Tierra, Mercado y Estado”, en, Políticas Agrícolas, Número Especial, Los mercados de tierra rurales en América Latina, REDCAPA, Bogotá, 2000.

Whitaker, Morris, D., Evaluación de las reformas a las políticas agrícolas en el Ecuador, Estudio Síntesis, Vol I, IDEA, Quito, 1996.

Yunus, Muhammad, Hacia un mundo sin pobreza, Editorial Andrés Bello, Barcelona, 2000.